



Sospechosa resistencia de EE.UU. a conversar sobre la problemática de la droga

En respuesta al planteamiento del presidente Pérez Molina de Guatemala, primer jefe de gobierno con coraje para proponer la liberalización de las drogas como un método más sensato y eficaz para enfrentar este gran desafío de nuestro tiempo, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Janet Napolitano, sin aportar razones, ha dejado claro que su país no está dispuesto siquiera a sentarse a debatir un cambio de rumbo en su política de prohibición. La prohibición no solamente no ha logrado contener el tráfico ilegal, sino que se ha convertido en su principal incentivo, al proporcionar un mercado negro internacional con fantásticos márgenes de ganancias. La actual "guerra de las drogas" también se constituye en el principal incentivo para la violencia.

En respuesta al planteamiento del presidente Otto Pérez Molina de Guatemala, primer jefe de gobierno con coraje para proponer la liberalización de las drogas como un método más sensato y eficaz para enfrentar este gran desafío de nuestro tiempo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, ha dejado claro que su país no está dispuesto siquiera a sentarse a debatir un cambio de rumbo en su política de prohibición.

Como única y vaga explicación, sin aportar razones, simplemente adujo que la despenalización "no es viable ni es la mejor manera de combatir el narcotráfico", a lo que agregó que Estados Unidos, reiterando su posición de siempre, sí está listo para brindar más "ayuda" a la región con el fin de "mejorar las capacidades para impedir la producción y distribución" de estupefacientes.

Lo primero es falso, lo segundo directamente indignante. Como si la preocupación del presidente Pérez Molina y de toda América Latina fuera sencillamente obtener más cooperación, mientras decenas de miles de sus ciudadanos mueren como carne de cañón en esta guerra absurda e inútil sostenida por Estados Unidos, y millones más sufren todos los días las consecuencias nefastas de una violencia criminal sin precedentes.

Tal como lo habían vaticinado algunos sagaces visionarios en el pasado, hoy es trágicamente evidente que estos cuarenta años de "guerra a las drogas" solo han servido para alimentar una formidable maquinaria mafiosa, capaz de socavar hasta los cimientos de las débiles instituciones y democracias latinoamericanas, y una no menos formidable y voraz burocracia estatal montada supuestamente para combatirla. Solamente Estados Unidos le dedica cada año ientre 50.000 y 100.000 millones de dólares!, razones más que suficientes para que exista un poderoso ejército de políticos, militares, funcionarios públicos y empresarios interesados en ignorar o suprimir cualquier debate sobre cambio de estrategias.

Pese a semejante derroche de recursos, ninguno de los loables objetivos que se pretendían alcanzar se consiguió. El consumo siguió aumentando. Como referencia, en Estados Unidos creció del 5,8% de la población mayor de 12 años en 1991-93 a 8,9% en 2008, lo que equivale a unos 22 millones de consumidores más, según datos proporcionados en un reciente artículo por Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute. Las sustancias prohibidas se multiplicaron, los carteles de narcotraficantes se fortalecieron y expandieron, si uno fue desmantelado surgieron dos en su reemplazo, y la criminalidad asociada directa o indirectamente al narcotráfico ha quebrantado miserablemente la calidad de vida de cientos de millones de personas.

La prohibición no solamente no ha logrado contener el tráfico ilegal, sino que se ha convertido en su principal incentivo, al proporcionar un mercado negro internacional con fantásticos márgenes de ganancias, obtenidos debido a que, como explica Hidalgo, en estas condiciones el precio de la sustancia deriva del valor artificial logrado por los riesgos de distribución, no al costo de producción. Menciona, por ejemplo, que el consumidor estadounidense paga por la cocaína 100 veces más de lo que cuesta producirla. De esta manera, por efecto de la prohibición y de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, el negocio de las drogas ilegales mueve anualmente la sideral suma de 320.000 millones de dólares.

La actual "guerra a las drogas" también se constituye en el principal incentivo para la violencia, ya que ese mercado negro otorga ventajas comparativas no a los más eficientes, sino a los más amorales y despiadados, sin escrúpulos para corromper, sobornar, extorsionar o asesinar. La prohibición les crea el ambiente propicio que necesitan, porque les ayuda a desembarazarse de sus adversarios comerciales y a mantener al margen a potenciales competidores, lo cual, a su vez, les permite aplicar un estratosférico precio oligopólico.

Todo esto bien lo sabe el presidente Pérez Molina, cuyo país está en el epicentro de la conmoción de luto y desdicha causada por la sospechosa y desacertada política impulsada y sostenida por Estados Unidos. Se calcula que solo en México han muerto 50.000 personas en los últimos cinco años por hechos vinculados con el narcotráfico, en tanto que en la violenta Centroamérica el 60% del crimen es atribuido a cuestiones ligadas a las drogas ilegales.

Por lo tanto, si el Gobierno de Estados Unidos tiene una pizca de sensibilidad por las víctimas y respeto por los latinoamericanos, que ya no nos venga con cantos de sirena ni declaraciones arrogantes de sus altos funcionarios. Que escuche la iniciativa de Pérez Molina, que se siente a discutir con los líderes e intelectuales de la región y de su propia nación que hace años vienen haciendo propuestas y clamando por alternativas. Entre estos figuran los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México), el escritor peruano Mario Vargas Llosa, y recientemente también el ex presidente de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, Milton Romani. Es en ese ámbito donde debe demostrar con hechos y argumentos, y no con expresiones presuntuosas pero vacías, que la despenalización no es viable ni conducente.

4 de Marzo de 2012 00:00